



Ciudad de México, México

Ciudad de México, DF, México, 25 de abril de 2017

Al pueblo de México

Al gobierno de México

A la comunidad periodística nacional e internacional

Con motivo de los constantes asesinatos de periodistas en México, quienes integramos la Red Mexicana de Periodistas Ambientales (REMPA) fijamos nuestra posición política ante el pueblo de México y el mundo, y presentamos una declaración de tres puntos.

1. Mantenemos nuestro más enérgico rechazo a los atentados contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico y exigimos al Gobierno de México que aplique garantías efectivas a los trabajadores de prensa. Al mismo tiempo, demandamos justicia para los deudos de los periodistas que ya no están con nosotros y para aquellos que se recuperan de lesiones.
2. Exigimos al Gobierno de México que investigue con seriedad y solvencia las amenazas, agresiones y violencia física contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación, particularmente contra nuestra amiga y compañera Pame Tajonar.
3. Demandamos la solidaridad expresa de los propietarios de los medios de comunicación, quienes si no son atacados en sus bienes, mantienen la actitud del aquí no pasa nada, o ante el asesinato y agresión a sus reporteros prefieren cerrar como ocurrió a inicios de abril de 2017 con el periódico El Norte, donde laboraba Miroslava Breach.

Manifestamos nuestra solidaridad con las familias de los colegas asesinados, agredidos, hostigados, amenazados y con los de quienes aún permanecen desaparecidos.

Es indiscutible la función social del periodismo y de los periodistas en la construcción de la democracia y en el desarrollo de los pueblos y las naciones. La violencia contra los profesionales del periodismo en México no puede permanecer impune y la sociedad no debe seguir inmóvil ante esta ola de crímenes.

Hace cinco años, el 24 de mayo de 2012, manifestamos estos puntos y a un lustro de distancia, la situación en el país no ha cambiado: Persisten las agresiones y la violencia contra trabajadores de prensa a un nivel alarmante. México, sigue siendo uno de los países en el mundo donde la profesión periodística es altamente peligrosa y nada frena esta escalada.

Al artero asesinato de la colega Miroslava Breach el pasado 24 de marzo de 2017 en Chihuahua, que a la fecha no ha sido resuelto, se suman los del reportero de la fuente policíaca Maximino Rodríguez Palacios, colaborador del Colectivo Pericú, quien fue asesinado a balazos el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur y el 16 de abril la del periodista Juan José Roldán corrió la misma suerte en Tlaxcala.

Además, han perdido la vida en forma violenta y hasta ahora impune, Ricardo Monlui Cabrera, director de la revista El Político de Xalapa y columnista de El Sol de Córdoba. Es el primer periodista asesinado durante el nuevo gobierno de Veracruz que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares. Aquí, en esta entidad en los últimos seis años, quedaron impunes al menos 19 asesinatos de periodistas y fotógrafos, durante el gobierno de Javier Duarte.

También el mes de marzo asesinaron en Ciudad Altamirano, Guerrero, al reportero Cecilio Pineda Birto. Esta entidad es una de las más inseguras junto con la Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Morelos.

Igualmente en lo que va de 2017, han quedado sin resolver otros incidentes como la agresión a balazos contra Armando Arrieta Granados, jefe de Información del diario La Opinión de Poza Rica. El atentado contra el periodista Julio Omar Gómez, hecho en el que uno de sus escoltas murió. La brutal agresión contra el reportero Gilberto Navarro, atropellado en Guanajuato por un funcionario público local, así como el incidente laboral en el que Israel Hernández, joven periodista del colectivo Ojos de Perro vs la Impunidad, fue lesionado también por arma de fuego.

No podemos dejar de omitir el acoso laboral y personal que sufrió nuestra compañera periodista ambiental Pame Tajonar, directora del sitio web Tierra Baldía durante el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas, por denunciar actos de corrupción, violencia y sobre todo sus políticas públicas contrarias al interés de los ciudadanos por la protección y conservación ambientales. Aún ahora, el hostigamiento persiste.

El gobierno mexicano muestra una actitud omisa, lenta e indiferente, no obstante, o pese a contar con la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una institución obesa e ineficiente, que depende del Ejecutivo Federal y forma parte de la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR).

Algunos datos demuestran esta situación: La propia FEADLE, en un informe fechado en noviembre de 2016, admitió que entre agosto de 2010 y agosto de 2016 se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas (39% por amenazas, 17% por abuso de autoridad y 7% por lesiones y homicidios).

De este universo de averiguaciones, solo 101 procedieron y el presunto agresor fuera consignado ante un juez, es decir, 12.6% de los casos. Lo más alarmante es que de esas 798 averiguaciones se generaron solamente 2 sentencias condenatorias, lo que significa que 99.75% de los casos no ha recibido sentencia y no hay culpables. ¡Absurdo!

Pero es aún más disparatado que esta ineficiencia de la FEADLE nos cueste dinero a los contribuyentes mexicanos. En tres años apenas, de 2012 a 2015, esa dependencia de la PGR recibió un presupuesto de 80 millones 98 mil 565 pesos.

Reiteramos nuestra solicitud a todos, hombres y mujeres libres de este país y el mundo, para alzar la voz unánimemente y exigir garantías absolutas al ejercicio del periodismo en todo México y castigo a los asesinos de periodistas. Si el gobierno mexicano no sabe, no puede o no quiere, ¡Nosotros sí!

Red Mexicana de Periodistas Ambientales, AC (Rempa)

[info.rempa@gmail.com](mailto:info.rempa@gmail.com)